

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 6° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-13948-2017
CARATULADO : **PÉREZ/Enel Generación Chile S. A.**

Santiago, veintiséis de Noviembre de dos mil veinte

VISTOS:

Que comparece Ignacio Pérez Walker, abogado, por sí y en representación legal de Asesorías e Inversiones Ipewa Ltda., ambos domiciliados en Avenida Nueva Providencia 2250, Oficina 1003, comuna de Providencia e interpone demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de Enel Generación Chile S.A., representada legalmente por Valter Moro, ambos domiciliados en calle Santa Rosa 76, comuna de Santiago.

Funda su acción en que con fecha 9 de diciembre de 2002, constituyó la sociedad Asesorías e Inversiones Ipewa Limitada, cuyo giro principal era el asesoramiento en la inversión e implementación de proyectos energéticos.

Agrega que producto de lo anterior, con fecha 1 de enero de 2013, a través de la sociedad Ipewa suscribió con Empresa Nacional de Electricidad S.A. un contrato denominado “Prestación de Servicios de Apoyo y Seguimiento al Desarrollo de Proyectos”, cuyo objetivo principal fue la asesoría profesional en apoyo al desarrollo y perfeccionamiento del estudio de impacto ambiental del proyecto Punta Alcalde (en adelante, indistintamente, el Proyecto).

En consecuencia, el objeto del contrato fue entre otras cosas, analizar el contexto político, económico e industrial de la zona y en especial identificar los posibles escenarios de riesgo que podría generar el proyecto. Así, y para esto, se llevaron a cabo charlas y reuniones junto a personas y entidades interesadas en el Proyecto, como así también con opositores al mismo, entre los cuales se encontraron dirigentes gremiales, empresariales, sindicales, políticos, educacionales, comunales y gubernamentales, tanto a nivel local como nacional, y que tuviesen algún tipo de interés tanto a favor o en contra del proyecto que se buscaba implementar en la zona.

Indica que la vigencia del contrato se pactó entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2013, sin perjuicio de que a través de un Addendum de fecha 20 de junio de 2013, la vigencia del contrato se prorrogó desde el 1 de julio de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013.

Manifiesta que el contrato principal de 1 de enero de 2013, como también su Addendum de fecha 1 de julio de 2013, fueron suscritos por su persona, en representación de IPEWA Limitada, por una parte y, por don Carlos Martín Vergara, Fiscal de Endesa, y por don Sebastián Fernández Cox, Gerente de Desarrollo de Endesa, por el otro.

Señala que el precio pactado por los servicios contratados fue de \$60.000.000 emitiendo Ipewa Limitada las siguientes facturas por los servicios prestados a la demandada Factura N°s 333, 335, 340, 342, 351,



Foja: 1

353, 355, 361 y 362, todas pagadas por la misma según el plazo y la forma que lo disponía el contrato. Cabe destacar que los honorarios pactados quedaron por resolver un success fee, señalándose por parte de Joaquín Galindo, Gerente General en esa época de Endesa, y Sebastián Fernández Cox, que este tema sería tratado más adelante.

Afirma que el contrato se cumplió a cabalidad, es decir, el demandante actuando en representación de Ipewa Limitada, ejecutó las gestiones necesarias a efectos de lograr la definitiva aprobación del proyecto Central Termoeléctrica Punta Alcalde. Así, se cumplió cabalmente el encargo y objeto del contrato en la forma en que las partes acordaron que llevara a cabo la asesoría.

_Manifiesta que el Proyecto Central Termoeléctrica Punta Alcalde consistía en la construcción de una central termoeléctrica catalogada como uno de los dos proyectos energéticos de mayor envergadura que se implementarían en el país. Su ubicación se programaba a 15 kilómetros de la comuna de Huasco.

Añade que el comienzo del proyecto Punta Alcalde se desarrolló bajo un contexto hostil con las comunidades y gremios agrícolas vecinos. El escenario energético en Chile era complejo tras los fallidos intentos de llevar adelante los reconocidos y controvertidos proyectos energéticos Hidroaysen y la Termoeléctrica Barrancones de Suez Energy.

Que en cuanto al proyecto Punta Alcalde, los cuestionamientos de la comunidad se referían principalmente a que la comuna de Huasco se sitúa en una zona de aquellas que se denominan “saturada de contaminación”. Así lo concluyeron diferentes estudios medioambientales de la época emitidos tanto por entidades locales como incluso internacionales. Diferentes estudios contradicen dichas cifras y es así como el proyecto fue aprobado y rechazado en distintas instancias y a través de distintas autoridades o consejos.

Expone que durante todo el año 2013 y parte del año 2014, Endesa S.A. implementó todo un trabajo técnico, contratando para esto las asesorías de empresas expertas en el área, tales como la empresa Ipewa Limitada, a fin de obtener la aprobación definitiva del proyecto, por medio de la comunicación tanto en sectores sociopolíticos locales y centrales, empresariales y dirigenciales de la zona de la región de Atacama.

Así, y en virtud de la exitosa labor llevada a cabo -entre otros- por los demandantes, a través del establecimiento de una serie de condiciones impuestas por la ciudadanía, en el mes de diciembre de 2014, el comité de ministros del gobierno del ex presidente Sebastián Piñera Echeñique aprobó la construcción de la central termoeléctrica Punta Alcalde, solucionando o compensando las trabas medioambientales que representaba el referido proyecto.

Indica que según lo relatado, el resultado del encargo encomendado por Endesa a Ipewa Limitada resultó del todo exitoso, ya que, finalmente el consejo de ministros del gobierno de la época revirtió la decisión de la autoridad regional de Atacama, aprobando el proyecto y construcción de la Central Termoeléctrica Punta Alcalde.

Que en el cumplimiento de su labor, el demandante mantenía reuniones constantes con los ejecutivos de Endesa e informaba a éstos de las gestiones específicas que desarrollada. En este contexto, sostuvo reuniones, por ejemplo, con el Intendente de Atacama, Rafael Prohens y con las Autoridades Regionales y Nacionales y con diversos stakeholders del Proyecto.

Que respecto de la concurrencia de los elementos de la responsabilidad extracontractual, sostiene que con fecha 23 de junio de 2015, Endesa S.A. solicitó al Servicio de Impuestos Internos una modificación de declaraciones de impuestos a la renta relativas a los años 2012 a 2015, a través de un formulario del cual se lee lo siguiente: “Por medio de la presente, solicitamos tenga a bien modificar las declaraciones de impuestos a la renta correspondientes a los años tributarios 2012 a 2015, ambos inclusive, dado que se ha detectado que en ese periodo existen desembolsos que no cumplen a cabalidad con lo establecido en el



Foja: 1

artículo N° 31 de la ley sobre Impuesto a la Renta en relación al artículo N° 21 de la referida ley. Se hace presente que los desembolsos fueron contabilizados como activo, por lo que hasta la fecha no han sido deducidos como gastos de base imponible de Primera Categoría. Por los años 2010 y 2011 no se han detectado operaciones susceptibles de representar brechas tributarias. Se adjuntan antecedentes”.

Entre los antecedentes que se adjuntaron se encuentran facturas emitidas por empresas cuyos representantes legales son los conocidos operadores políticos y recaudadores de campañas electorales Pedro Yaconi Valdebenito y Giorgio Martelli Robba, incluyendo al demandante conjuntamente con los nombrados.

Además, y referente al caso de autos, también se adjuntaron a la referida solicitud, las facturas N°s 333, 335, 340, 342, 351, 353, 355, 361 y 362, todas emitidas por IPewa a Endesa S.A, solicitando su modificación y trasladando desde la cuenta de “activo fijo en curso” a la cuenta de “gastos rechazados”.

Expresa que el origen de lo anterior se encuentra en un informe de fecha 22 de junio de 2015, es decir, un día antes del ingreso de la referida solicitud al SII, emitido por el estudio de abogados Cariola, Diez, Pérez-Cotapos a solicitud de Endesa S.A., documento que tuvo como base un informe anterior realizado por Audit Chile denominado “Análisis del proceso de asignación de contratos y pagos de honorarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP)”.

Señala el documento elaborado por Cariola, Diez, Pérez-Cotapos que: “El presente análisis preliminar abarca el mismo período del Informe (de Audit Chile) y damos por ciertos los hechos establecidos en él y por correcta su metodología y sus conclusiones, sin que hayamos realizado una investigación independiente de los hechos, ni se haya determinado la destinación última efectuada por los prestadores de los servicios contratados que son mencionados en el Informe (“proveedores”) respeto de los dineros correspondientes a los pagos efectuados por la Compañía (Endesa), sobre los cuales el Informe no contiene información”. Continúa el documento aseverando que “de los antecedentes analizados, se desprende que el Directorio de la Compañía actuó de manera diligente al encomendar la auditoria y el presente informe, ya que efectivamente se encontraron situaciones que ameritan un análisis más profundo para determinar si ellas son constitutivas de infracciones a la legislación vigente y, en caso afirmativo, la naturaleza de éstas y sus consecuencias”.

De tal modo se desprenden que el objetivo del informe fue analizar las implicancias legales para Endesa S.A. frente a determinadas contrataciones efectuadas por ésta entre el año 2012 y 2015, y que pudiesen constituir una infracción a normas tributarias de donaciones electorales o cualquier otro delito similar, por haber pagado la empresa a “Personas Políticamente Expuestas” prestaciones de servicios. Así, el fin del trabajo encomendado, fue obtener recomendaciones inmediatas que resultaren plausibles de adoptar por Endesa S.A.

Entre las conclusiones del documento elaborado por el referido estudio jurídico se desprenden que: “En el contrato de consultaría de enero 2013 con la sociedad Asesorías e Inversiones IPEWA Limitada, referente a la actividad de apoyo en el desarrollo y perfeccionamiento de la evaluación de Impacto ambiental del proyecto Punta Alcalde, existen reparos con respecto al tercer criterio de análisis, ya que los elementos documentales disponibles durante la verificación no son coherentes con los entregables definidos contractualmente. El contrato preveía el envío de informes mensuales y un informe final, constando sólo un correo electrónico enviado por el consultor en julio de 2013. El importe pagado por Endesa respecto a este contrato fue de \$60.000.000, según el Informe fue contabilizado como activo fijo en curso, no habiendo sido deducido como gasto tributario (...), y finalmente recomienda que; “En el caso de los servicios materia de este análisis, la falta de antecedentes que permitan acreditar que los desembolsos se encuentran directamente relacionados con los proyectos a los cuales se encuentran explícitamente asociados y la sola falta de acreditación de los mismos, hace que a éstos deba dárseles el tratamiento de un



Foja: 1

gasto rechazado ”.

Con todo, la demandada con el único fin de proteger sus propios intereses y de proyectar una imagen de corrección ante el Servicio de Impuestos Internos y la justicia ordinaria, actuando dolosamente o a lo menos con culpa grave -a sabiendas de las consecuencias que esto podría generar a los demandantes-, modificó ante el SII la información referente a los actores, bajo la excusa de ser el suscrito una “Persona Expuesta Políticamente” y no existir suficiente respaldo de la prestación efectiva del servicio contratado, con lo que se le incluyo frente al SII y la opinión pública con cuestionados operadores políticos como Pedro Yaconi Valdebenito y Giorgio Martelli Robba, en circunstancias que el demandante había dejado el Senado y la política activa hacía más de catorce años.

Expresa que el informe emitido por el estudio Cariola, Diez, Pérez-Cotapos, no excluye en nada la responsabilidad de Endesa S.A., es más, acrecienta su responsabilidad a tal punto que la posterior solicitud ingresada ante el SII debe ser catalogada a lo menos bajo un actuar doloso o gravemente culpable, luego que, tal como el documento lo señala, el fin del trabajo encomendado fue brindar recomendaciones inmediatas que resultaren plausibles de adoptar.

Además, tanto el informe realizado por Audit Chile como el documento elaborado por Cariola, Diez, Pérez Cotapos, se basaron en documentación e información proporcionada por Endesa, empresa que no podía menos que conocer la efectiva prestación de los servicios contratados, ya sea a través de sus ejecutivos, empleados, testigos o documentos que se encontraban en poder de Endesa. Estos antecedentes acreditan y respaldan los trabajos realizados por los demandantes. Contrario a lo anterior, Endesa sólo informó a sus asesores sobre la existencia de supuestamente un único correo electrónico recibido de parte del suscrito.

Luego, conociendo o debiendo conocer que existían mayores antecedentes que acreditaban los servicios prestados por los demandantes, la demandada debió abstenerse de incluir las facturas emitidas por Ipewa en su solicitud de 23 de junio de 2015 ante el Servicio de Impuestos Internos.

Afirma que la demandada escondió a Audit Chile y al Estudio Jurídico Cariola, Diez, Pérez Cotapos, decenas de informes y documentos entregados por su parte a través de correos electrónicos a sus ejecutivos. Cabe destacar que estos correos electrónicos son prueba contundente de la labor realizada. Un correo electrónico no se puede falsificar, modificar, mutar, ni alterar en su contenido, ni en la fecha de su emisión. Hay servidores de Endesa y del demandante que así lo acreditan y que son prueba irrefutable de lo que se afirma en esta demanda. Señala que asistía, además, al menos dos veces al mes a reuniones en Endesa, estacionándose en el subterráneo del edificio corporativo de la demandada, y viajaba mensualmente a Copiapó y Vallenar a cumplir con su labor. Además tuvo reuniones en Copiapó con Seremis y el Intendente. En Santiago se reunió con autoridades nacionales, tales como el ex ministro Cristián Larroulet.

Afirma que no es creíble que Endesa no haya tenido respaldo suficiente del trabajo realizado por los demandantes al momento de nutrir de información a sus auditores y abogados. Son demasiadas las pruebas que acreditan el trabajo que los demandantes realizaron para la demandada en 2013, e incluso durante el año siguiente, sin que se haya cobrado un solo peso adicional a lo establecido en el contrato, que ya había perdido vigencia.

Señala que hay una conducta engañosa, que constituye dolo o al menos culpa grave de la demandada al entregar la información de un solo correo electrónico enviado por los actores a Audit Chile y al Estudio Cariola Pérez Cotapos.



Foja: 1

Indica que de las rectificaciones que hizo Endesa en esa oportunidad y en otras posteriores, fue la única persona que prestó efectivamente los servicios, en virtud de un contrato válidamente celebrado. Sin embargo, la demandada, con desprecio a la honra y la reputación ajena, decidió incluir en la rectificación de impuestos al demandante, mezclándolo con personas altamente cuestionadas en el contexto del escándalo suscitado por el financiamiento ilegal de campañas políticas. Y, lo que es peor, lo hizo por orden del máximo ejecutivo de Enel en Roma y del Directorio en Santiago, a fin de proyectar una imagen de corrección y de lavado de imagen.

Es importante señalar respecto a lo anterior que el Servicio de Impuestos Internos declinó presentar querellas penales y civiles contra aquellas compañías que hicieron rectificaciones ante el Servicio de Impuestos Internos por las denominadas “platas políticas”.

Hace presente que en la época en comento, Endesa entrega a medios de comunicación social y a periodistas, los antecedentes que involucran al demandante Ignacio Pérez Walker en el tema de las “platas políticas”, en un contexto en que Chile vivía un escándalo de corrupción que involucraba, entre otras empresas, a Penta y SQM. La mayor lacra social que podía existir para la opinión pública era el hecho de ser autor o sujeto de los delitos relacionados con las platas políticas. Los ejecutivos de Penta estaban encarcelados y los de SQM desfilaban a diario por la Fiscalía y los Tribunales de Justicia.

Los titulares de los diarios y de la televisión ocupaban tiempo importante de sus audiciones en este tema. Endesa entregó la información pública a través de los medios de comunicación de que el demandante Ignacio Pérez había emitido facturas que no correspondían a un trabajo profesional y que, por tanto, era parte de estos políticos que habían violado la ley. Esta información trasciende en algunos medios de comunicación con anterioridad al 22 de junio de 2015, día en que Endesa ingresa al SII la rectificación que se ha aludido. La campaña contra el suscrito fue a todo bombo, desacreditándolo ante la opinión pública y exponiéndolo al status de delincuente que en esa época recaían sobre los políticos y ejecutivos que estaban involucrados en el tema de las facturas ideológicamente falsas con fines de financiamiento político.

Agrega que con fecha 8 de julio de 2016, por resolución pronunciada por el Fiscal Regional Metropolitano Zona Centro Norte Andrés Montes Cruz, se ordena iniciar de oficio una investigación a efectos de indagar la existencia de algún delito relacionado con cohecho o desvío irregular de dineros de parte de Endesa S.A. La decisión se enmarca luego de que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España, emitiera una consulta a Chile acerca de posibles lícitos de índole políticos cometidos por Endesa Chile o personas ligadas a esta última.

La investigación que inició la Sra. Fiscal Ximena Chong, bajo el Ruc N° 1600646320-0, tuvo como primera diligencia, la emisión de un oficio dirigido al Servicio de Impuestos Internos a través del cual le solicitó que informare si Endesa S.A. ha llevado a cabo los siguientes actos: i) Si presentó al SII rectificaciones de impuestos a la renta durante el año 2015 para cualquiera de los años tributarios anteriores y además; ii) que se informare si la empresa pagó impuestos producto de las mismas.

Con fecha 14 de septiembre de 2016, responde el referido oficio indicando al Ministerio Público que de la revisión de los antecedentes de Endesa S.A. se han detectado 25 documentos que no estarían acreditados, encontrándose entre sus emisores la sociedad “Asesorías e Inversiones Ipewa Limitada”, sin indicar el servicio que llevaría a cabo un sumario administrativo sobre los mismos. Agrega el SII, que la empresa se acogió a un procedimiento voluntario, presentando con fecha 23 de junio de 2015, declaraciones rectificatorias relativas a los periodos 2012 a 2015, en la que reconoce determinados desembolsos no acreditados de acuerdo al artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, categorizándolos e



Foja: 1

informándolos al SII como gastos rechazados.

Señala que a la fecha de presentación de la demanda la investigación aún se encuentra vigente, y por poseer un carácter altamente complejo, sumado a las demoras propias de nuestro sistema procesal penal, probablemente se extienda por un tiempo indeterminado, lo que a todas luces no tiene por qué ser soportado por los demandantes, menos considerando el actuar doloso o gravemente culpable de la demandada Endesa S.A.

Añade que una vez que la Sra. Fiscal Ximena Chong Campusano inició la investigación a consecuencia del requerimiento recibido, desde la Fiscalía de España han circulado nuevamente, en diversos medios escritos, radio y televisión, noticias que aseveran que el ex Senador Ignacio Pérez Walker, a través de Ipewa Limitada, habrían emitido facturas por servicios no prestados a Endesa S.A., en las que se le involucra y asemeja al suscrito con los cuestionados operadores políticos Pedro Yaconi Valdebenito y Giorgio Martelli Robba.

Señala diversos artículos de prensa en los que aparece nombrado, hacienda presente que la demandada emitió un comunicado público, que es citado por en los periódicos, en el que señaló haber rectificado ante el SII un monto de \$276.000.000 por pagos realizados entre el año 2012 y 2015, bajo el argumento de que éstos carecerían de respaldos suficientes para justificar el gasto.

Alega que se desprende inequívocamente que la información en la que se basan los medios de comunicación que incluyen irresponsablemente al abogado suscrito dentro del círculo de operadores políticos cuestionados por emisión de boletas por servicios inexistentes para fines de financiamiento político, proviene directamente de las explicaciones públicas que la demandada ha entregado para fundar las referidas rectificaciones realizadas ante el SII, como también de la investigación penal que el Ministerio Público actualmente sigue al respecto.

Concluye que la causa directa del desprestigio, el daño a la honra y el daño patrimonial que actualmente soportan las demandantes, innegablemente está constituido del malicioso o a lo menos culpable actuar con que Endesa S.A. procedió al decidir, sin más, modificar la información ante el SII relativa a las facturas emitidas por las demandantes, al considerarlas como “Persona expuesta políticamente”, luego de una endeble opinión emitida por sus abogados con la pobre información entregada por la contraria.

Que respecto de la responsabilidad de Endesa alude al artículo 2329 del Código Civil, la que entrega a nuestro ordenamiento jurídico el principio que presume que todo daño que provenga de la malicia o negligencia de otra persona, debe ser indemnizado por ésta.

Indica que la demandada modificó con malicia o a lo menos con culpa grave, ante el Servicio de Impuestos Internos, información de suma importancia relativa a los demandantes, incluyéndolo con operadores que financiaban campañas políticas.

Que el informe elaborado por el estudio Jurídico Carióla, Diez, Pérez-Cotapos, que Endesa realizó dichas rectificaciones solo con el fin de salvaguardar sus propios intereses, omitiendo considerar los efectos que esto ocasionaría en los terceros emisores de las facturas que fueron declaradas en carácter de gasto rechazado.

A su juicio se evidencia aún más la responsabilidad de Endesa, cuando se observa que las rectificaciones ante el SII se realizaron sólo sobre facturas emitidas por -como los denomina el mencionado informe de Carióla, Diez, Pérez-Cotapos- “Personas Expuestas Políticamente”, incluyéndose maliciosamente a las demandantes Ipewa Limitada e Juan Ignacio Pérez Walker dentro del mismo círculo en el que se cuentan sujetos actualmente investigados por delitos tributarios y asociados a financiamiento irregular de campañas políticas, como Pedro Yaconi Valdebenito y Giorgio Martelli Robba.

Con todo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 2329 del Código Civil, y siguiendo el criterio sentado



Foja: 1

por la Excelentísima Corte Suprema a su respecto, corresponde que en autos se declare que la demandada es responsable de los perjuicios que actualmente sufren las demandantes, luego que entregara al SII información falsa sobre los demandantes, sin previamente haber cumplido con un estándar mínimo de cuidado, que podría haberse materializado tan sólo con confirmar la efectividad de los servicios que Ipewa Limitada e Ignacio Pérez Walker efectivamente prestaron durante el año 2013 a la demandada.

Contrario a lo anterior, bajo una mera recomendación de sus abogados con casi nula información, y sin confirmar en sus registros si correspondía seguir lo recomendado, difundieron ante el SII la información falsa que hoy afecta injustamente a los demandantes. La difusión de esta información, como era de esperar, llegó a los medios de comunicación social y urbi et orbi el demandante fue tildado como un abogado vinculado a las boletas ideológicamente falsas emitidas con fines de financiamiento político.

Que en cuanto a los perjuicios provocados los demandantes han tenido un lucro cesante en sus actividades profesionales que cuantifican en la suma de \$400.306.000, en razón de pérdida de contratos e ingresos profesionales.

Que en cuanto al daño moral propiamente tal respecto del demandante Perez Walker, es imposible restituir el honor, prestigio y dignidad. Esto ha ido acompañado de un sufrimiento, traducido en una depresión psicológica, larga y profunda. El tamaño de los daños morales no es menor cuando se trata de una contienda entre una de las empresas más poderosas del país y de uno de los profesionales más calificados que tiene Chile en el sector de la energía. Luego, por concepto de daño moral sufrido este se avalúa en la suma cinco mil millones de pesos.

Que respecto del daño moral que afecta a Ipewa, cabe citar lo fallado por nuestros Tribunales superiores de justicia en cuanto a que no existe razón para impedir la acción de personas jurídicas por tales daños, pues, si bien es cierto que nuestra legislación no se pronuncia al respecto, el concepto de daño moral ha evolucionado doctrinariamente, desde una aceptación restringida del doloris premium a otro más amplio, no limitando al padecimiento o sufrimiento que comprende sólo a las personas naturales, sino también extensivo al daño derivado del deterioro o menoscabo de los derechos a la personalidad como la reputación, fama, prestigio y confianza comercial, que también alcanza a las personas jurídicas.

Sostiene que tras el irresponsable actuar de la demandada, la sociedad Ipewa -lisa y llanamente- dejó de operar como una empresa de prestaciones profesionales, ya que su reputación quedó gravemente afectada, no teniendo nunca más un cliente. El daño moral sufrido por IPEWA se avalúa en \$20 millones de pesos.

Finalmente previas citas legales solicita tener por interpuesta demanda ordinaria de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de Enel Generación Chile S.A., ex Endesa S.A., representada por Valter Moro, ambos ya individualizados, admitirla a tramitación y, en definitiva, acogiéndola, declarar que se condena a Enel Generación Chile S.A. a pagar una indemnización por concepto de lucro cesante en favor de los demandantes Ignacio Pérez Walker y de la sociedad Asesoría e Inversiones Ipewa Ltda. ascendente a la suma de cuatrocientos millones trescientos seis mil pesos; por concepto de daño moral en favor del demandante Ignacio Pérez Walker la suma de cinco mil millones de pesos y a la sociedad Asesoría e Inversiones Ipewa Ltda. veinte millones de pesos o las sumas que el Tribunal estime que prudente de conformidad con el mérito de la causa, las que deberán ser reajustadas de acuerdo con la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de la notificación de la presente demanda y la del pago efectivo, o con el reajuste que el Tribunal fije de acuerdo al mérito de los autos, más intereses y costas.



Foja: 1

Que con a folio 13 la parte demandada contesta la acción dirigida en su contra, solicitando su rechazo con costas.

Que en primer término niega y controvierte expresamente los hechos descritos en la demanda, por su inexactitud e ineffectividad, en especial cuanto pretende imputar a Enel actuaciones ilegales y dolosas realizadas ex profeso con la intención de perjudicar a los demandantes.

Afirma que Enel no ha cometido ilícito alguno que pueda dar lugar a una condena por indemnización de perjuicios; que sus actuaciones no han causado a los demandantes daño de ninguna índole; y que, por el contrario, sus actuaciones se han enmarcado dentro de la legalidad vigente, utilizando los mecanismos tributarios legítimos en defensa de sus propios intereses y haberlo hecho con el debido respaldo legal.

Indica que por contrato privado sin fecha, pero con vigencia entre el 1º de enero de 2013 y el 30 de junio de 2013, prorrogado después por un addendum de fecha 20 de junio de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, Enel, contrató los servicios de la empresa Ipewa Ltda., como consultor para que la apoyara en el desarrollo y perfeccionamiento del proyecto Punta Alcalde dando a conocer, de la mejor manera posible, el proyecto a las autoridades administrativas municipales, provinciales, regionales y centrales. Se estableció en dicho contrato que Ipewa entregaría asesoría a ENEL, en las siguientes materias: “1.1.- Análisis del contexto político, económico e industrial con especial énfasis en identificar posibles escenarios de riesgos para el Proyecto; 1.2.- Apoyar al mandante en propiciar y facilitar las relaciones y vínculos con las personas naturales o con los representantes de las entidades que tengan interés con el Proyecto, ya sea en calidad de afectados, opositores o interesados, sean estos dirigentes políticos, gremiales, empresariales, sindicales, educacionales, artesanales o personas o entidades relevantes en la zona en la que se desarrollará el proyecto.. 1.3.- Colaborar con el Mandante en la solución de conflictos que dificulten las aprobaciones del Proyecto. En especial el Consultor aportará todo su conocimiento y experiencia profesional para posicionar adecuadamente el Proyecto ante las autoridades regionales y nacionales, y ante los actores relevantes, generando canales de comunicación con estas personas y entidades, que permitan facilitar la aprobación ambiental y de ordenamiento territorial del proyecto, que sean del caso; 1.4.- Promover entendimientos entre el Mandante y los opositores al Proyecto que permitan avanzar en la mejor forma posible, en todas las instancias administrativas de aprobación requeridas por la normativa vigente; 1.5.- Colaborar en la definición de una estrategia comunicacional para el Proyecto y un plan de medios que la sustente, la que incorporará una estrategia comunicacional digital y de redes sociales. Ejecutar, por indicación de Enel Chile, las acciones que sean solicitadas para la concreción de la estrategia comunicacional que se defina; 1.6.- Promover el Proyecto, ante las



Foja: 1

instancias de participación ciudadana. 1.7.- Mensualmente, el consultor deberá informar por escrito al Mandante acerca de la ejecución del contrato. A su término, el Consultor entregará al Mandante un informe final, que contenga la descripción de las labores realizadas en apoyo del Proyecto. 1.8.- El Consultor ejecutará los encargos de este contrato en su propio nombre.”.

Reitera que estas fueron las labores encomendadas a la parte demandante en virtud del contrato de asesoría suscritos entre ambas partes. Destaca que, entre las labores que debía efectuar el Consultor, estaba la de entregar mensualmente un informe escrito respecto a la ejecución del contrato y un informe final con la descripción de las labores realizadas.

Añade que Enel es una sociedad anónima abierta, en que parte importante de sus acciones pertenecen a una empresa estatal italiana y por ende está sujeta, en relación a sus operaciones y actuaciones corporativas, a diversos controles nacionales e internacionales. En términos generales, desde el punto de vista nacional, al ser sociedad anónima abierta, debe cumplir con una serie de obligaciones establecidas en la ley de sociedades anónimas.

En virtud de esta regulación está sujeta a estrictos controles y tiene la obligación de aportar información relevante acerca de su situación financiera, contable, tributaria, decisiones de su directorio, actuaciones corporativas, etc., entre otros, a la Superintendencia de Valores y Seguros, al Servicio de Impuestos Internos; a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; a su Junta de Accionistas, a sus controladores extranjeros y estos, a su vez, a los organismos fiscalizadores de su país, etc.

Que desde el punto de vista internacional, debe informar de sus actuaciones y decisiones importantes a su controlador, (principal accionista individual italiano) y a las entidades fiscalizadoras administrativas de ese país. Esto es, la empresa está sometida a una intensa supervisión y a una gran cantidad de controles que fiscalizan sus actuaciones, operaciones y contratos y debe informar de sus contingencias, tanto a las autoridades administrativas del país, como a sus controladores, y por su intermedio, a las autoridades administrativas extranjeras, lo que hace que sea especialmente celosa en el cumplimiento de las medidas que se imponen a este tipo de sociedades, adoptando las medidas necesarias para evitar, o al menos atenuar, la ocurrencia de contingencias que pueda acarrearle la imposición de multas y sanciones.

Indica que en el marco de esta situación, y ante el llamado que hizo el Servicio de Impuestos Internos a que las empresas revisaran y rectificaran ante dicha entidad fiscalizadora aquellos desembolsos que no contaran con respaldo documentario suficiente y a fin de evitarles cuestionamientos que pudiesen significar que ese Servicio les practicara liquidaciones de impuestos, con el consiguiente costo tributario, Enel realizó una auditoria interna a fin de verificar que sus proveedores hubiesen cumplido



Foja: 1

adecuadamente con las obligaciones emanadas de los contratos suscritos con éstos y que los mismos hubieren cumplido con la entrega íntegra y oportuna de lo que se comprometieron, es decir, que hubieren entregado los informes o ejecutado las acciones comprometidas en los contratos.

El informe de auditoría interna realizado por Enel buscaba determinar si se respetaba el cumplimiento de la asignación y gestión de los contratos y al efecto, se focalizó, principalmente, en verificar si se cumplieron o no con tres criterios; a saber: i) si se dio o no cumplimiento con el sistema de contratación internos de Enel; ii) si se usaron o no instrumentos contractuales apropiados y se incorporaron las cláusulas relativas a los programas de cumplimiento del grupo; y iii) si existe o no inherencia y respaldo documental de los costos relativos a los servicios prestados por los proveedores en estudio y si existe coherencia entre el producto de la actividad realizada por los consultores y los empleados definidos contractualmente.

Expresa que después de una selección de los proveedores en base a la importancia de éstos, los montos involucrados y si estos eran Personas Políticamente Expuestas (PEP) y/o si se trataba de proveedores que tuviesen algún grado de relevancia nacional o internacional o personas con influencia política, fueron nueve los contratos de los proveedores sujetos a la revisión. De estos nueve contratos, tres de ellos tuvieron observaciones, uno de los cuales fue el contrato con Ipewa.

Manifiesta que el informe de auditoría interna formuló reparos con respecto al tercer criterio antes señalado, en relación con Ipewa y referente a la actividad de apoyo en el desarrollo y perfeccionamiento de la evaluación de impacto ambiental del Proyecto Punta Alcalde, ya que los elementos documentales disponibles, en especial los entregables establecidos en el contrato no fueron coherentes y coincidentes con los pactados contractualmente. En otras palabras, la auditoría interna concluyó que Ipewa incumplió la obligación de entregar informes mensuales de su trabajo y el informe final, tal como se pactó en su numeral 1.7.-del contrato. Señala también el informe de la auditoría, que el importe total del contrato por \$ 60.000.000 fue pagado, y que se contabilizó como activo fijo en curso.

Además de la auditoría interna, y para mayor respaldo de Enel, se solicitó al estudio jurídico externo e independiente Cariola Diez Pérez-Cotapos, que tuvo a la vista los resultados de la auditoría, un informe en derecho respecto a las implicancias legales que podría tener para la empresa determinadas contrataciones de servicios efectuadas entre los años 2012 a 2015 que pudieren importar infracciones a normas tributarias, de derecho común y/o determinadas leyes especiales, como las de posibles infracción a las leyes sobre transparencia, límite y control de gasto electoral (ley 19.884), la ley que incentiva y norma el buen uso de donaciones que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos (ley 19.885), ley de sociedades anónimas (ley 18.046), entre otras y, con su mérito, realizar recomendaciones inmediatas que resultaren posibles de adoptar.



Foja: 1

Señala que la firma Cariola Diez-Pérez Cotapos, en lo que interesa respecto al contrato con Ipewa, concluyó que, dado que la auditoría interna acusó que no se entregaron a Enel la totalidad de los informes comprometidos en el contrato, recomendó rectificar a la brevedad las declaraciones de impuestos correspondientes a los períodos tributarios en que se realizaron los desembolsos, a fin de que se les diese el tratamiento de gastos no necesarios para producir la renta, pagando los impuestos y multas que procedan por dicho concepto. Es decir, no se está negando - como señala el demandante Pérez - que Ipewa no hubiese cumplido la totalidad del contrato. Se objeta a la sociedad demandante la omisión de entregar los informes comprometidos en los términos acordados, circunstancia que podría haber generado que el SII objetara los pagos efectuados como gastos tributarios aceptados, ya que no podría Enel justificar adecuadamente la condición de gasto necesario para producir la renta.

En consecuencia existía una evidente contingencia tributaria que era recomendable corregir para evitar sanciones mayores. Y la forma de corregirlo era, al decir de los expertos tributarios, rectificar sus declaraciones de impuesto a la renta, asumiendo el pago de mayores impuestos, evitando así, además, tener que soportar fuertes y onerosas multas establecidas en el Código Tributario. Lejos estuvo, entonces, el ánimo y la intención dolosa y maliciosa que el demandante atribuye a su representada.

Agrega que siguiendo el consejo dado por el estudio jurídico Cariola Diez Pérez Cotapos, Enel presentó con en junio de 2015, al Servicio de Impuestos Internos, rectificaciones de impuesto a la renta por los períodos 2012 a 2015, con la siguiente glosa estampada en el formulario 2117 del SII: “Por medio de la presente, solicitamos tenga a bien modificar las declaraciones de impuestos a la renta correspondiente a los años tributarios 2012 a 2015, ambos inclusive, dado que se ha detectado que en ese período existen desembolsos que no cumplen a cabalidad con lo establecido en artículo N° 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en relación a artículo 21 de la referida Ley. Se hace presente que los desembolsos fueron contabilizados como activo, por lo que hasta la fecha no han sido deducidos como gasto de la base imponible de Primera Categoría. Por los años tributarios 2010 y 2011 no se han detectado operaciones de representar brechas tributarias. Se adjuntan antecedentes.”

Por otro lado, ninguna consecuencia tributaria acarreó esta rectificación a los emisores de las facturas incluidas en la rectificación.

Asimismo, con fecha 22 de junio de 2015, el Directorio de Enel emitió una declaración al mercado señalando que el informe del estudio jurídico recomienda declarar como gasto no utilizable ante el Servicio de Impuestos Internos aquellos pagos que carecerían de respaldos suficientes para justificar el gasto. La declaración rectificatoria es por gastos rechazados aplicados a un monto total de \$ 276 millones de pesos. No se menciona en la declaración rectificatoria ante el Servicio de Impuestos Internos, ni en la declaración del Directorio el nombre de los emisores de las facturas incluidas en la declaración rectificatoria.



Foja: 1

Concluye que todos los hechos posteriores y en especial las informaciones periodísticas que vinculan a los demandantes con la rectificación tributaria efectuada por Enel con terceras personas, son de exclusiva responsabilidad de los medios de comunicación y no son imputables a Enel, la que hizo uso de un derecho, cual fue rectificar sus propias declaraciones de impuestos a la renta, acto legalmente incuestionable autorizado por las disposiciones tributarias, que en caso alguno puede ser tildado de ilegítimo, doloso o gravemente culpable malicioso, y que por lo demás no acarrea consecuencias tributarias al emisor de las facturas.

Niega lo afirmado por la parte demandante en orden a que “Enel entregó la información pública a través de los medios de comunicación de que el demandante Ignacio Pérez había emitido facturas que no correspondían a un trabajo profesional y que, por tanto, era parte de estos políticos que habían violado la ley”.

Enel, en su comunicado ni siquiera menciona a los demandantes, ni a ninguno de los emisores de las facturas o facturas rectificadas.

Manifiesta que en la cláusula 1.7 del contrato suscrito con la sociedad Ipewa se pactó que ésta debía mensualmente informar por escrito al mandante acerca de la ejecución del contrato y entregar al final, un informe que contuviese la descripción de las labores realizadas en apoyo del proyecto. Pues bien el contrato de marras, tuvo una vigencia entre el 1º de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013, es decir abarcó todo el año 2013, lo que significaba que el demandante debió entregar 12 informes mensuales y lo más importante, un informe final.

Afirma que el caso es que la parte demandante nunca entregó el informe final a que lo obligaba el contrato. Respecto a los informes mensuales solo se entregaron algunos correos electrónicos, los que la parte demandante califica en su libelo muy generosamente como “informes”, siendo que la mayoría no pasan de ser una breve reseña de las reuniones que el Sr. Pérez afirma haber realizado con distintas personas en distintas oportunidades, no constituyendo formalmente y en nuestra opinión informes en derecho, ya que su contenido no está relacionado necesariamente con el objetivo de la consultoría descritos en el contrato.

Sostiene que si se considerasen generosamente aquellos escuetos correos electrónicos como “informes”, no entregó nunca el informe final, el que sin duda era el más importante de todos ya que debía contener una detalle de todo lo obrado así como las opiniones, recomendaciones técnicas, evaluaciones, orientaciones y consejos en relación con el proyecto, tal cual se obligó en el contrato, es decir no cumplió el demandante íntegramente con dar cuenta de su cometido.

Habida consideración de lo anterior, la auditoría interna de Enel llegó a la conclusión que la omisión del Sr. Pérez de entregar los doce informes mensuales y su informe final a que se comprometió en el contrato, y a los escuetos y pocos correos electrónicos entregados, en cambio, a Enel, cuya condición de “informe” es al menos discutible, no eran suficiente respaldo o sustento documentario para justificar



Foja: 1

tributariamente como gasto necesario para producir la renta los honorarios pagados a él en virtud del contrato de consultoría suscrito entre ellos.

A ello debe agregarse el contexto del acontecer nacional de la época, en que se cuestionaba a muchas empresas su laxitud para justificar desembolsos que no eran tributariamente procedentes y el llamado efectuado por el Servicio de Impuestos Internos para que los contribuyentes regularizaran situaciones que teóricamente pudieren ser objeto de rechazo, con las consiguientes sanciones tributarias y pecuniarias, llevaron al Directorio de Empresa a optar por rectificar sus declaraciones excluyendo de ellas aquellas facturas. Como se puede apreciar, lo sucedido lejos está de ser una acción dolosa o maliciosa realizada con el ánimo de perjudicar la reputación del demandante Pérez Walker.

Reiteran que ni él, ni su sociedad fueron mencionados en las actuaciones de Enel ante el SII, ni en la declaración pública efectuada en junio de 2015 por el Directorio. Ni siquiera se ha negado que el Sr. Pérez y su sociedad Ipewa no hayan realizado la consultoría contratada. No fue pues Enel la que ha difundido aquella información que el Sr. Pérez considera que le afecta en su reputación.

Manifiesta que no le corresponde a Enel asumir responsabilidad alguna por las actuaciones de los medios de comunicación, los que investigaron, interpretaron y difundieron a su amaño y bajo su directa responsabilidad la información que menciona al Sr. Pérez y a su sociedad.

Alega la inexistencia de hecho ilícito.

Señala que la responsabilidad que los demandantes asignan a Enel es de origen extracontractual, esto es, la que emana de un hecho ilícito, que es la base para construir y desarrollar esta clase de responsabilidad. Si no existe el ilícito, no hay responsabilidad extracontractual que genere la obligación de indemnizar perjuicios. Al efecto el artículo 2314 del Código Civil señala que el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, sin embargo en las actuaciones de Enel no se ha incurrido en ningún hecho ilícito del cual emane obligación de indemnizar perjuicios, de existir.

Expone que el actor al referirse a la supuesta concurrencia de los elementos de la responsabilidad extracontractual señala en su primer acápite, (A), como: Hecho Ilícito que causó el daño” la “Rectificación a la declaración de Impuestos por parte de Endesa S.A.” Más adelante, señala que “... actuando dolosamente o a lo menos con culpa grave – a sabiendas de las consecuencias que esto podría generar a los demandantes- modificó ante el SII la información referente a los actores, bajo la excusa de ser el suscrito una “Persona Políticamente Expuesta” y no existir suficiente respaldo de la prestación efectiva del servicio contratado, con lo que se me inmiscuyó frente al SII y a la opinión pública con cuestionados operadores políticos...”.

Expresa que lo señalado en este párrafo por el demandante es absolutamente falso e inexacto. El demandante altera y distorsiona la realidad. Ni en la declaración



Foja: 1

rectificatoria presentada al SII, ni en la declaración pública de Enel su nombre, ni ningún otro fue mencionado. No obstante, en la misma página 8 de su demanda, en su número 4 reitera que "... acrecienta su responsabilidad (de Enel) a tal punto que la posterior solicitud ingresada ante el SII debe ser catalogada a lo menos bajo un actuar doloso o gravemente culpable...".

Afirma que algo que es de la más absoluta obviedad, el acto de rectificar declaraciones de impuestos propias, no puede ser catalogado como un hecho ilícito, cuando las normas tributarias de nuestro país lo permiten expresamente. Es un derecho, de todo contribuyente el poder modificar ante el SII sus propias declaraciones de impuesto a la renta, por así establecerlo el artículo 36 bis del Código Tributario, lo que descarta que la presentación al SII de declaraciones rectificatorias sean constitutivos de algún ilícito.

También se imputa a su parte, como integrante del ilícito, que las declaraciones rectificatorias se hayan efectuado en el mismo procedimiento y en conjunto con otras facturas emitidas por empresas representadas por los señores Yaconi y Martelli, los que, al decir de la demanda, se hizo con el propósito de desprestigiarlo. La verdad es otra. Las rectificaciones se hicieron juntas ya que todas las facturas que se presentaron se encontraban en la misma situación tributaria, es decir no cumplían con la condición o requisito de ser consideradas un gasto necesario para producir la renta en los términos del artículo 31 de la Ley de la Renta, en relación con el artículo 21 de la misma norma.

Expresa que esta situación de incompletitud de antecedentes para justificar la deducción como gasto tributario las facturas rectificadas fue doblemente aconsejada, tanto por la auditoría interna como por el estudio jurídico Cariola, Diez Pérez-Cotapos, y vale reiterar que se revisó por auditoría interna una gran cantidad de contratos, de los cuales respecto de tres emisores de facturas y proveedores, se determinó que no reunían las condiciones establecidas en la Ley de la Renta.

La circunstancia, pues, que se haya efectuado la declaración rectificatoria de manera conjunta para todas las facturas que no tenían el sustento adecuado para aceptar el gasto, no transforma en ilegítima o ilícita la actuación de Enel. Que el demandante tenga una mala opinión de los señores Yaconi y Martelli-opinión por cierto muy subjetiva- no transforma en ilegal la rectificación de las declaraciones de impuestos realizadas por su representada.

Alega que no existiendo un hecho ilícito, en los términos del artículo 2314 del Código Civil, debe descartarse de plano la responsabilidad que le pretende imputar a su parte el demandante.

Pero aún más, tampoco existe una relación de causalidad entre la rectificación de las declaraciones de impuesto a la renta efectuada por Enel, con el supuesto perjuicio que los demandantes dicen haber padecido, requisito esencial para que nazca la obligación de repararlos.



Foja: 1

La causalidad es un requisito de la responsabilidad por culpa. Así se desprende de los artículos 1437, 2314, 2329 y 1558 del Código Civil entren otros. Todas estas disposiciones vinculan en relación causa efecto al hecho ilícito con el daño. No existiendo esa vinculación, no hay responsabilidad para el autor del hecho, aún si éste hubiese sido un hecho ilícito.

En este caso, el acto realizado por Enel de rectificar sus propias declaraciones de impuestos, es absolutamente inocua frente a las imputaciones del demandante de que ello le habría causado los perjuicios que alega. De existir algún perjuicio, la acción causante de ellos habría sido la divulgación por medios de comunicación de masas información alterada y distinta a la entregada por Enel. La presente acción legal debió entonces dirigirse en contra de aquellos medios de comunicación que divulgaron información, distinta a la entregada por Enel bajo su propia responsabilidad.

En efecto, en la demanda se señala que diversos medios de comunicación, incluyendo diarios y canales de televisión ocuparon tiempo importante de sus ediciones en estos temas. Se indica que Enel entregó la información que el demandante, Ignacio Pérez, había emitido facturas que no correspondían a un trabajo profesional y que por tanto era parte de estos políticos que habían violado la Ley. Esta afirmación de la demanda no es veraz. Nunca Enel señaló lo anterior, ni menos que su trabajo no correspondía a un trabajo profesional. El comunicado de Enel no menciona el nombre de ninguno de los emisores de las facturas ni siquiera el número de las facturas. Más adelante la demanda transcribe algunos párrafos de información que habrían aparecido en la prensa, y que incluirían el nombre del Sr. Pérez, pero de ello no es responsable la empresa demandada, por cuanto nunca se mencionó en su comunicado el nombre del Sr. Pérez, de la empresa Ipewa, ni del Sr. Yaconi ni del Sr. Martelli. Es decir, las publicaciones de prensa, distintas al comunicado de Enel, son de exclusiva responsabilidad de los medios de comunicación.

Añade que el comunicado del directorio de Enel de fecha 22 de junio de 2015, señala que se analizó el informe de auditoría interna y de los abogados independientes referentes a los pagos a personas políticamente expuestas y relacionadas a estas y el reporte determinó que en el ámbito societario no se desprenden infracciones a la legislación societaria. A continuación agrega lo siguiente: “En sus conclusiones, el informe del estudio jurídico recomienda declarar como gasto no utilizable ante el Servicio de Impuestos Internos aquellos pagos que carecerían de respaldos suficientes para justificar el gasto. Esta declaración rectificatoria es por gastos rechazados aplicados a un monto de \$ 276 millones más recargos legales”.

Por otro lado, se menciona la existencia de una investigación penal, por delitos de cohecho o desvío irregular de dinero por parte de Enel, que se habría iniciado por el Fiscal Regional Metropolitano Zona Centro Norte como consecuencia que la justicia penal de España emitiera una consulta al Ministerio Público por posibles ilícitos de índole político cometidos por Enel o personas ligadas a esta última. Entre las



Foja: 1

diligencias decretadas por la fiscalía se pidió al SII que informara si Enel había presentado rectificaciones de impuestos durante el año 2015 y si la empresa pagó impuestos por esas rectificaciones. Esta investigación que está en curso y que afecta a Enel, evidentemente es ajena a toda iniciativa de Enel, quien no ha realizado denuncia alguna en contra del demandante ni de ninguna persona. No es posible responsabilizar a su parte por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales de España o del Servicio de Impuestos Internos.

Que en relación a los perjuicios solicitados dice que los demandantes solicitan por concepto de indemnización de perjuicios la nada despreciable suma de \$ 5.420.306.000 (cinco mil cuatrocientos veinte millones trescientos seis mil pesos), cifra que resta toda seriedad a su demanda por su exageración y desproporción, aun en el evento, por cierto hipotético, que hubieren sufrido algún perjuicio imputable a su parte.

De esta indemnización, \$ 400.306.000 corresponden a lucro cesante tanto de la sociedad Ipewa, cuanto del demandante Pérez Walker, sin especificarse cuanto corresponde a cada uno; \$ 5.000.000.000 por daño moral para el demandante Ignacio Pérez y \$20.000.000 por el mismo concepto para la sociedad Ipewa.

Solicitamos a SS rechazar en su integridad la desmedida indemnización pedida ya que, como se ha señalado supra mi parte no es la responsable de ningún hecho ilícito que sea causa de los daños.

Que respecto del “lucro cesante” reclamado por los actores, y que hacen consistir en la suma de \$400.306.000, el Tribunal podrá apreciar que en el libelo no se proporciona antecedente alguno en los que se pudiese sustentar la existencia de un perjuicio por este concepto que haya afectado el patrimonio de los demandantes que tuviese como causa directa el hecho de la especie, de manera que por esta sola circunstancia debería ser desestimada esta pretensión.

Al respecto, creemos oportuno señalar que en la forma planteada en la demanda, el lucro cesante corresponde a la definición misma de incerteza, pues se señala genéricamente que corresponde a ganancias que se dejaron de percibir en relación con los contratos que habrían celebrado los demandantes si no hubiesen sido víctimas del desprestigio que dicen haber padecido, pero no se indica con precisión cuales fueron tales contratos no suscritos o actividades lucrativas no realizadas como consecuencia directa de los hechos que se imputan a Enel. Lo anterior, sin perjuicio de recordar que el peso de la prueba recae sobre el demandante, porque el daño, como los demás hechos que determinan el nacimiento de la obligación indemnizatoria, debe ser probado por quien la alega.

Que en relación al daño moral pretendido en autos por el actor Pérez Walker se debe tener presente que la aflicción y el dolor- de existir- deben compensarse con una



Foja: 1

suma razonable y prudente para lograr la finalidad de la indemnización, que no es la sanción ni el lucro, sino que es puramente satisfactiva, con entera prescindencia de la fortuna del victimario o de quien responde por éste.

En el hipotético evento que se llegase condenar a Enel al pago de las indemnizaciones reclamadas, de establecer un monto, este debe ser acorde al mérito del proceso y a los criterios reiteradamente sustentados por la Jurisprudencia, y rebajar considerablemente el monto de lo demandado, a una cantidad equitativa y justa.

Adicionalmente, resulta necesario señalar que en la forma en que ha sido demandada su indemnización, el daño moral resulta del todo improcedente e inoponible a esta parte comoquiera que lo que se reprocha es la supuesta denostación pública que habría sufrido la parte demandante, o la circunstancia de aparecer en los medios de comunicación junto a los señores Martelli y Yaconi, hechos que fueron de responsabilidad de los medios de comunicación y no de Enel, circunstancias que, como es evidente, resultan ser del todo ajenas a su parte, más bien propias del juicio subjetivo que se forma la opinión pública o los medios de comunicación, y que por tanto, no poseen la aptitud necesaria para sustentar la ingente indemnización demandada, además de carecer del vínculo causal necesario para que sea acogida.

Finalmente, a las alegaciones anteriores debe añadirse la imposibilidad de indemnizar por daños morales a Ipewa, persona jurídica ficticia, incapaces de sufrir dolor ni de presentar satisfacción ante compensaciones monetarias. Una persona jurídica puede experimentar daño solo en atributos que poseen expresión patrimonial como daños emergentes o lucro cesante, atributos ya referidos y negados con anterioridad. El daño moral no lo pueden sufrir las personas jurídicas, como Ipewa, ya que el bien que es la causa de pedir, es de naturaleza extrapatrimonial o inmaterial, y por lo mismo no apreciable en dinero.

Para el improbable caso que la demanda origen de esta litis fuere acogida, solicita su rechazo en lo que respecta a los reajustes e intereses solicitada por la parte demandante.

En lo atinente a los intereses demandados, éstos deben ser rechazados toda vez que, desde que su parte ha negado la existencia de la obligación demandada, mal puede condenarse al pago de tales intereses. No obstante, para el caso de acogerse el libelo, cabe señalar que sólo en la sentencia definitiva podrá determinarse la existencia de la obligación de mi parte y su subsecuente monto. En consecuencia, el respectivo cumplimiento sólo podrá requerirse desde el momento en que esa sentencia se encuentre ejecutoriada o, al menos, cause ejecutoria, toda vez que con anterioridad a tal requerimiento el deudor no podría encontrarse en mora de cumplir una obligación, cuya existencia y monto se encuentran sublite.

Que en cuanto a los reajustes, es menester tener presente que la obligación al pago de reajuste sobre una cantidad de dinero judicialmente determinada es una obligación accesoria o auxiliar con relación al pago del capital. Siendo así, la obligación al pago



Foja: 1

del reajuste no puede tener una existencia anterior al nacimiento de obligación principal a la cual accede, cuya fuente sería la sentencia ejecutoriada, por consiguiente, en el evento que el fallo acoja la demanda total o parcialmente, se debe establecer la reajustabilidad a partir de la fecha en que el fallo quede firme.

Que a folio 16 la parte demandante evacua la réplica.

Expone que en su contestación, Enel no dice la verdad respecto del objetivo esencial de su rectificación de impuestos, así como de las auditorías previas. Afirma que el propósito de su auditoría habría sido “verificar que sus proveedores hubiesen cumplido con las obligaciones emanadas de los contratos suscritos con éstos y que los mismos hubieren cumplido con la entrega íntegra y oportuna de lo que se comprometieron”. Y luego reconoce que, para tales efectos, se seleccionaron únicamente nueve contratos -en base a su importancia, montos y a si involucraban a Personas Políticamente Expuestas-, tres de los cuales arrojaron observaciones, siendo uno de ellos el contrato de Ipewa.

Afirma que como se probará -aunque constituye un hecho público y notorio-, el propósito primordial de la rectificación de impuestos de Enel, así como de la auditoría interna e informe que le sirvieron de “recomendación”, fue evitar las gravísimas consecuencias que se derivarían del pago por parte de la demandada de facturas ideológicamente falsas emitidas por los archiconocidos operadores políticos Pedro Yaconi Valdebenito y Giorgio Martelli Robba, recaudadores de las campañas electorales del ex Presidente de la República Eduardo Frei Ruiz-Tagle y de la Presidenta de la República S.E. Michelle Bachelet Jeria, respectivamente.

En su intento por justificar su irresponsable actuar, al mezclar en su rectificación esas facturas falsas con otras emitidas en cumplimiento de un contrato, cuya existencia -por lo demás- se reconoce explícitamente en la contestación, Enel incurre en serias contradicciones acerca del respaldo documental que existe en relación al contrato celebrado con Ipewa, así como al cumplimiento del mismo.

En efecto, la contraria, luego de acusar que Ipewa Limitada no habría entregado la totalidad de los informes comprometidos, señala que “no se está negando... que Ipewa no hubiese cumplido la totalidad del contrato”. Enseguida, luego de citar un párrafo del informe elaborado por el estudio Cariola, Diez, Pérez-Cotapos, en que se indica que sólo constaba un correo electrónico enviado por Ignacio Pérez en julio de 2013, reconoce que se entregaron “algunos correos electrónicos” los que -añade- no constituirían informes en derecho, como si el señor Pérez alguna vez se hubiera comprometido a emitir informes de ese tipo. O sea, la demandada confiesa que no entregó toda la información disponible a los asesores que le habrían recomendado rectificar las facturas de Ipewa, junto a aquellas asociadas al financiamiento irregular de campañas presidenciales, las que, obviamente, sin que hiciera falta auditoría alguna, debían ser rectificadas.

Enel, en definitiva, busca introducir en esta controversia un antecedente que, además



Foja: 1

de falso, es del todo impertinente, como es el cumplimiento o incumplimiento del contrato de Ipewa. Fuera de que Enel jamás puso en duda el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales de Ipewa, lo único relevante es que las facturas de esa empresa tenían -a diferencia de las facturas de los señores Yaconi y Martelli- una causa real y válida, como es un contrato. De esta manera, aun cuando el contrato no se hubiera cumplido -lo que no ocurrió-, el gasto asociado podía justificarse fácilmente ante el Servicio de Impuestos Internos. Ahora, si por cualquier causa la autoridad impositiva hubiera objetado la autenticidad del contrato -especulación que podría plantearse quizá con cuántos contratos de Enel y sus filiales-, la contraria tenía a su disposición múltiples comunicaciones que refrendaban la existencia y cumplimiento del mismo. También habría podido obtener de su contraparte copiosa documentación complementaria que daba cuenta de las múltiples gestiones efectuadas en ejecución de la convención.

En definitiva, el cumplimiento del contrato con Ipewa y su respaldo documental nada, absolutamente nada, tienen que ver con las contingencias tributarias y de otra índole que enfrentaba Enel al momento de rectificar sus declaraciones de impuestos. Si la demandada consideraba que Ipewa no envió suficientes informes, ni hecho las gestiones comprometidas, debió iniciar un juicio de resolución o cumplimiento de contrato y, luego, basado en una eventual sentencia que obligara a Ipewa a restituir o indemnizar, hacer las complementaciones o rectificaciones tributarias pertinentes.

Que respecto de la afirmación de la demandada respecto a que no “ha incurrido en ningún hecho ilícito”, ya que la rectificación de impuestos es un derecho de todo contribuyente amparado por las normas tributarias, explicando que “las rectificaciones se hicieron juntas ya que todas las facturas que se presentaron se encontraban en la misma situación tributaria, es decir no cumplían con la condición o requisito de ser consideradas un gasto para producir la renta”, dicha razón que entrega la contraria para asimilar las facturas de Ipewa con las emitidas por los recaudadores electorales apunta a que “los elementos documentales disponibles, en especial los entregables establecidos en el contrato no fueron coherentes y coincidentes con los pactados contractualmente”. Así lo habría determinado una auditoría interna, cuyo propósito, como se adelantó, habría sido verificar que sus proveedores hubiesen cumplido adecuadamente con sus obligaciones contractuales, para lo cual se seleccionó la módica suma de nueve contratos, en base a su importancia, montos y a si involucraban a Personas Políticamente Expuestas”.

Añade que “esta situación de incompletitud de antecedentes para justificar la deducción como gasto... fue doblemente aconsejada, tanto por la auditoría interna como por el estudio jurídico Cariola, Diez, Pérez-Cotapos”, reiterando que en la primera se revisó una “gran cantidad de contratos”.

Enel agrega que “ni en la declaración rectificatoria presentada al SII ni en la



Foja: 1

declaración pública de ENEL su nombre (el de sus mandantes) ni ningún otro es mencionado”. Y finaliza sus descargos señalando que el hecho de que “el Sr. Pérez tenga una mala opinión de los señores Yaconi y Martelli -opinión por cierto muy subjetiva- no transforma en ilegal la rectificación”.

Esta parte obviamente no controvierte la licitud abstracta que tienen las rectificaciones de declaraciones de impuestos. Lo que se impugna en este juicio es que Enel rectificó sus impuestos de manera abusiva, privilegiando sus propios intereses y sacrificando por completo los de sus mandantes al mezclar -maliciosa o al menos culpablemente- sus legítimas facturas con otras ideológicamente falsas emitidas con fines de financiamiento irregular de la política. Para peor, Enel publicitó esa rectificación de impuestos que involucraba a sus mandantes en conjunto con recaudadores electorales, en el contexto de un crispado ambiente, en que el escándalo del financiamiento irregular de la política ocupaba buena parte de la atención de la prensa y la opinión pública, y hacía que los políticos involucrados desfilaran a diario por las policías, el Ministerio Público y los tribunales de justicia.

Es del todo indiferente que la conducta que se objeta pueda ser lícita aislada de sus propósitos y circunstancias esenciales. Manejar un automóvil, por ejemplo, también lo es. Pero cuando se hace de manera imprudente y se provoca daños a terceros, engendra responsabilidad civil.

Sostiene que el hecho de que la contraria afirme que las facturas de sus representados se encuentran en la “misma situación tributaria” que facturas ideológicamente falsas refrenda la malicia o el grave descuido con el que ha obrado Enel. La semejanza que hace Enel resulta al menos temeraria si es que se funda en la alegada falta de respaldo documental, la cual, como se verá, en lo que se refiere al contrato con Ipewa, responde -única y exclusivamente- a la desidia de la contraria en la tarea de buscar los respaldos. En todo caso, como respaldo documental, las facturas de Ipewa al menos tenían un contrato, a diferencia de las emitidas por los señores Yaconi y Martelli.

A su turno, el hecho de que Enel no haya mencionado a sus mandantes en su declaración rectificatoria y en su posterior declaración pública resulta igualmente Indiferente. Lo que importa no es la glosa sino el contenido; y la rectificación de Enel - como cualquier investigador medianamente ducho podía determinar- incluyó las facturas falsas de los señores Yaconi y Martelli, junto a los legítimos instrumentos de Ipewa.

Que en cuanto a” la doble recomendación” a que alude la contraria no la exculpa en forma alguna. Particularmente si se considera que, como consta en las propias citas incluidas en la contestación, Enel omitió entregar a sus asesores información de la que disponía y que hubiera permitido distinguir, a cualquier agente de buena fe, la realidad de las facturas de Ipewa con las ideológicamente falsas que, como propósito fundamental, Enel buscaba rectificar. En otras palabras, la contraria fue al menos negligente al entregar la información en la cual se fundaron estas “recomendaciones”,



Foja: 1

por lo cual no puede ampararse en ellas para eludir la responsabilidad que tiene en los perjuicios provocados a sus mandantes.

En todo caso, no es efectivo que para efectos de la auditoría interna de Enel se hayan revisado “una gran cantidad de contratos”. Como confiesa la contraria, sólo se revisaron nueve, número que es francamente ridículo si es que realmente se buscaba determinar el estándar de cumplimiento de los prestadores de servicios de una compañía de la envergadura de Enel.

Contrario a lo que ocurrió con los señores Yaconi y Martelli, los demandantes si prestaron servicios efectivos a Enel, realizando múltiples gestiones tendientes a dar a conocer el proyecto energético denominado Punta Alcalde a las autoridades municipales, provinciales, regionales y centrales, cuestión que constituía el objetivo esencial del contrato, como lo confiesa la contraria en su contestación.

En el contexto del contrato, Ignacio Pérez trabajó arduamente durante más de un año, período en el cual tuvo reuniones en Santiago, Copiapó y valle del Huasco con centenares de personas. Las dudas que plantea la contraria respecto a la forma en que sus mandantes cumplieron el contrato no se condice con sus propios actos ni con la realidad contractual. En efecto, ninguno de los directivos o ejecutivos de Enel con los que se relacionaron los demandantes -en especial, los aludidos gerentes Galindo, Fernández y Moya- formuló, alguna vez, un reclamo respecto a la forma en que se cumplía el contrato. Es más, el señor Pérez prestó servicios a Enel asociados al proyecto Punta Alcalde más allá de la fecha comprometida en el contrato. Fue el 17 de enero de 2014, fecha en que la Excma. Corte Suprema rechazó el último recurso de protección interpuesto en relación al proyecto, cuando la labor del señor Pérez se entendió cumplida. Dicho acontecimiento se celebró con una comida de tres personas en el restorán “Europeo” de la comuna de Vitacura, a la cual el señor Pérez fue invitado por Joaquín Galindo, Gerente General de Endesa, y a la cual asistió también el Gerente de Desarrollo de la misma compañía, Sebastián Fernández. Posteriormente, Ignacio Pérez continuó atento a lo que ocurriría con el proyecto Punta Alcalde en el Comité de Ministros, sosteniendo reuniones con algunos de sus miembros. Dicho comité, finalmente, aprobó el proyecto a fines de ese año.

Alega que sus representados nunca se comprometieron a confeccionar informes en derecho para la contraria, como increíblemente se exige en su contestación. En ella se reprocha que los correos electrónicos que se enviaban sean calificados “generosamente como informes, siendo que la mayoría no pasan de ser una breve reseña de las reuniones..., no constituyendo formalmente y en nuestra opinión informes en derecho...”.

Indica que el término “informe”, según su sentido natural y obvio, consiste en la descripción, oral o escrita, de las características y circunstancias de un suceso o asunto (Diccionario de la Real Academia Española), y es sinónimo de “reseña” (Diccionario Español de Sinónimos y Antónimos), por lo que resulta incomprensible, absurdo, que



Foja: 1

ahora se reproche que los reportes escritos del señor Pérez hayan sido reseñas y no informes en derecho.

Afirma que los informes de Ignacio Pérez fueron generalmente comunicaciones escritas y, si en algunos meses no se hizo así, fue porque las partes -de común acuerdo- dispusieron lo contrario, cuestión perfectamente posible a la luz del artículo 1564 del Código Civil. Por lo demás, pese a que no lo establecía explícitamente el contrato, el señor Pérez mantenía reuniones periódicas con directivos de Enel, las que servían, entre otras cosas, para que mi representado diera cuenta de sus gestiones en apoyo al proyecto Punta Alcalde.

Alega que la existencia de un contrato y de múltiples correos electrónicos en los que se detallaban las gestiones realizadas en cumplimiento del mismo, constituían un respaldo más que suficiente para justificar los pagos efectuados a Ipewa frente a un hipotético requerimiento del Servicio de Impuestos Internos. Nada tenía que rectificar Enel; mucho menos en el contexto de un escándalo mediático que nada, absolutamente nada, tenía que ver con mis mandantes.

Finalmente, Enel intenta justificar el supuesto exceso de celo con el que habría actuado con respecto al contrato de mis mandantes en el hecho de que Ignacio Pérez sería una Persona Políticamente Expuesta, lo que resulta falso ya que la Unidad de Análisis Financiero define a estas personas como “los chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas”.

Que en el caso de Ignacio Pérez, militante de Renovación Nacional, se desempeñó como Senador por la III Región de Atacama por dos períodos, entre el 11 de marzo de 1990 y el 11 de marzo de 2002. Desde ahí, no ha ocupado ningún cargo público. Es decir, a la fecha de los hechos de esta causa, el señor Pérez había dejado de desempeñar “funciones públicas destacadas” desde hace más de una década, por lo cual -definitivamente- no era ni es hoy una Persona Políticamente Expuesta.

Que la alusión a este argumento, sumado al escaso celo con que actuó Enel a la hora de reunir el respaldo documental de la relación contractual que tenía con Ipewa, más bien hace pensar que la contraria deliberadamente buscó incluir en su rectificación a una persona de oposición, para así intentar desvirtuar la sonada vinculación de Enel con la obtención de recursos para las campañas presidenciales del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y de S.E. Michelle Bachelet, cuestión que derivó en la salida nada menos que del presidente de la compañía Jorge Rosenbluth, quien se convirtió en la persona que menos tiempo duró en tal cargo. La inclusión de las facturas de Ipewa en la publicitada rectificación de impuestos de Enel, por lo demás, fue un asunto que fue tratado y decidido en las más altas esferas de la compañía, incluyendo el directorio de su matriz italiana presidido por Francesco Starace.

Manifiesta que aunque Enel no haya mencionado en sus declaraciones el nombre de Ignacio Pérez o Ipewa, lo cierto es que realizó una rectificación de impuestos en



Foja: 1

relación a los pagos realizados a esta última en cumplimiento de un contrato, conjuntamente con pagos de facturas ideológicamente falsas emitidas con fines de financiamiento electoral. Los medios de comunicación se limitaron a investigar e informar los gastos que Enel había rectificado en el contexto del bullado caso por financiamiento irregular de la política que involucraba a una serie de grandes empresas, entre ellas Enel; y allí, junto a las facturas de los reconocidos recaudadores Yaconi y Martelli, cuyo respaldo documental era lisa y llanamente igual a cero, aparecían las facturas de mis mandantes.

Así las cosas, esta parte nada tiene que reprochar a los medios de comunicación por el hecho de haber informado un hecho que, evidentemente, era de interés público. Y mucho menos a las autoridades judiciales y administrativas por cumplir su función pública. Aquí sólo se persigue la responsabilidad de Enel por una actuación maliciosa o culpable que provocó serios perjuicios a mis mandantes.

Que respecto de los daños sufridos por sus representados perdieron contratos vigentes que tenían con empresas como Coemin S.A. -por \$2 millones mensuales- y Sociedad Química Minera de Chile S.A. -por \$4 millones mensuales-, luego de la maliciosa o culpable rectificación tributaria de Enel. Es más, el irresponsable actuar de Enel -lisa y llanamente- sepultó la carrera que tenía Ignacio Pérez como asesor en materia energética. Le provocó, además, un serio menoscabo en su honor, prestigio y dignidad, acompañado de una severa depresión.

Que a folio 18 la parte demandada evacua la dúplica

En primer lugar, la parte demandada reitera y ratifica íntegramente todas y cada una de las afirmaciones y argumentos invocados al contestar la demanda, y afirma que los dichos de la contraria en su réplica, con lo cuales intenta desvirtuar algunas de las aseveraciones contenidas en la contestación de la demanda, o son definitivamente incorrectas o falsas o bien las distorsiona en beneficio de sus propios intereses.

Por de pronto, la demandante reconoce en su réplica, entre otros, los hechos que pasan a señalarse, los cuales, por lo tanto, pasan a ser hechos de la causa, reconocidos y no controvertidos: Que entre las partes se suscribió el contrato singularizado en la contestación de la demanda con fecha 1º de enero de 2013 con vigencia al día 31 de diciembre de 2013; que en dicho contrato la parte del Sr. Pérez se obligó a entregar un total de 12 informes mensuales – uno cada mes- más un informe final; que la parte del Sr. Pérez entregó solo algunos correos electrónicos que ella califica generosamente como “informes”; que la parte del Sr. Pérez no entregó todos los informes mensuales, ni entregó el informe final referido en el contrato; que en su declaración rectificatoria ante el Servicio de Impuestos Internos Enel no mencionó el nombre del Sr. Pérez ni el nombre de Ipewa, ni el de ninguna otra persona;



Foja: 1

Insiste en que la parte demandante citando a su parte, señala que esta defensa no está negando que Ipewa no hubiese cumplido la totalidad del contrato y acusa una suerte de contradicción por sostenerse en la contestación que no se entregaron todos los informes comprometidos. Lo anterior es una manipulación de lo sostenido en la contestación de la demanda ya que lo señalado por esta defensa es que si bien se realizó el trabajo encomendado, lo que Ipewa no cumplió a cabalidad y completamente es con la entrega formal de todos los informes a que se obligó en el contrato y que debían dar cuenta del trabajo ejecutado.

Tampoco es cierto que su parte haya señalado o confesado, para usar sus mismas palabras, que no entregó toda la información a los asesores que recomendaron realizar la declaración rectificatoria. Es solo una afirmación gratuita de la contraria.

Señala que es del todo impertinente para el caso de autos “el cumplimiento o incumplimiento del contrato de Ipewa” y que “Enel jamás puso en duda el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales de Ipewa”. Después señala que “el cumplimiento del contrato con Ipewa y su respaldo documental nada tiene que ver con las contingencias tributarias y de otra índole que enfrentaba Enel al momento de rectificar sus declaraciones de impuestos”. Sorprendente afirmación de la contraparte ya que todo contribuyente medianamente diligente sabe, o debiera saber, que el respaldo documental de cualquier gasto es esencial, es un requisito ineludible conforme a la Ley de la Renta y el Código Tributario, para descontarlo como tal para efectos de la determinación de la renta líquida imponible. Por ende, no solo hay una directa relación con la contingencia tributaria, sino que la falta de sustento documental adecuado constituye la contingencia tributaria propiamente tal, que se buscó paliar mediante la correspondiente declaración rectificatoria.

Contrariamente a lo sostenido por la actora, la entrega de los informes acordados en el contrato, es un hecho absolutamente pertinente al tema que nos ocupa, ya que el sustento documentario que acredita como gasto necesario para producir la renta las facturas de Ipewa son justamente tales informes. Sin ellos, no hay manera de justificar formalmente el gasto. Es decir la contingencia tributaria que la contraparte desestima tan livianamente constituye la contingencia que ENEL debía superar, y la forma de hacerlo, si no podía acompañar los informes, ya que no les fueron entregados íntegramente, era mediante la rectificación que realizó y asumir de esa forma el costo que implicó.

La circunstancia que Enel haya rectificado su declaración tributaria buscaba, justamente, evitar que el gasto fuere cuestionado ex/post por el Servicio de Impuestos Internos y, consecuentemente, recibir una cuantiosa liquidación de impuestos con las multas y recargos por reajustes e intereses, cuyo costo habría sido mucho más alto que el de la rectificación. Nada más alejado de la realidad afirmar que la rectificación se hizo para enlodar el prestigio del demandante y de su sociedad. Ello solo está en la fecunda imaginación de la contraparte, y además supone que toda la estructura



Foja: 1

jurídica y administrativa de Enel, incluyendo a su directorio, institucionalmente, estaba llana y ansiosa para desprestigiar al actor. Si esa hubiese sido la intención de Enel, el nombre del Sr. Pérez se habría mencionado tanto en la declaración pública hecha por la empresa como en la declaración rectificatoria. La identificación del Sr. Pérez, fue obra de los medios de comunicación de masas, no controlados por Enel.

Que en el capítulo que denomina “Hecho Ilícito” reconoce que la rectificación tributaria es un derecho del contribuyente, sin embargo tanto en la demanda como en la réplica lo minimiza, desnaturaliza o lisa y llanamente lo califica de distintas formas llegando al extremo de señalar que se hizo para perjudicar al Sr. Pérez.

Agrega que la rectificación fue abusiva, privilegiando los propios intereses de Enel y sacrificando al Sr. Pérez, al haber mezclado maliciosa o culpablemente sus facturas con otras ideológicamente falsas con fines de financiamiento irregular de la política. Esta afirmación, que supone y califica intenciones, nuevamente no es más que una especulación, odiosa y audaz, que raya en la calumnia. No señala ningún antecedente serio que permita sostenerla, salvo la opinión subjetiva que le merecen a la contraria los señores Martelli y Yaconi, lo que desde luego no es suficiente como estándar probatorio para afirmar con tanta certeza las intenciones oscuras y malignas de Enel.

Que Enel haya rectificado sus declaraciones tributarias por cuanto la sociedad Ipewa no entregó todos los informes, fue lo correcto y adecuado para impedir mayores perjuicios a la empresa, acción que está muy lejos de ser abusiva, maliciosa o dolosa.

Enel, al actuar de la forma que lo hizo, naturalmente solo ha podido considerar y prever las consecuencias en el ámbito tributario y en este contexto ha tenido perfectamente claro que estaba ejerciendo un legítimo derecho de rectificación, sin que fuera posible que tal acto importara algún perjuicio o consecuencia tributaria negativa para los emisores de las facturas que estaban siendo rectificadas.

Advierte la contraria que lo que importa en la rectificación “no es la glosa sino el contenido”. Curioso, ya que en la declaración rectificatoria no se menciona a nadie ni a sus clientes ni a los emisores de las demás facturas, ni en la glosa ni en su contenido. Es decir, no hay diferencia entre glosa y contenido.

Más adelante refuta a su parte, señalando que los demandantes nunca se comprometieron a confeccionar informes en derecho como se exige en la contestación. No es el objeto real de la discusión la naturaleza de los informes que debía entregar la demandante, ni tal circunstancia es relevante en esta controversia. Independientemente del calificativo que quiera dársele, (en derecho, o no en derecho), un informe es un informe y los demandantes se comprometieron en el contrato, en forma clara y simple, a entregar informes mensuales y un informe final.

Si la contraria estima que los informes acordados no eran informes en derecho, ello es irrelevante y secundario y no nos detendremos a discutir sobre esta disquisición.



Foja: 1

Hace presente que de acuerdo a lo que se señala en el Punto 1.1.- de la cláusula primera del Contrato de Prestación de Servicios suscrito por el Sr. Pérez, en representación de Ipewa, que en copia se acompaña en el otrosí de este escrito, se incluyó dentro de su asesoría el “Análisis del contexto político, económico e industrial con especial énfasis en identificar posibles escenarios de riesgos para el Proyecto”. El Sr. Pérez es abogado y era él quien debía ponderar la forma en que evacuaba sus informes y que connotación estimaba que éstos debían tener.

Lo importante y central es que no se entregaron formalmente todos los entregables que debieron, y por más que la contraria intente desviar la atención con la calificación de éstos, lo medular es que no se entregó lo que debía entregarse. Es por ello que si se contrastaba por la autoridad tributaria lo comprometido en el contrato, con lo efectivamente entregado por Ipewa, se habría percatado que no se habían proporcionado todo lo comprometido, y consecuentemente ello habría traído consecuencias tributarias y económicas para Enel.

También es notable lo aseverado en la demanda cuando afirma que Enel “deliberadamente buscó incluir en su rectificación a una persona de oposición, para así intentar desvirtuar la sonada vinculación de Enel con la obtención de recursos para las campañas presidenciales del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y de S.E. Michelle Bachelet”. Ello atribuye una posición política determinada a una empresa de generación, cuestión que es absurda, está absolutamente fuera de lugar y refleja una especie de psicosis persecutoria, como si el Sr. Pérez fuese un actor político de primera línea al cual Enel institucionalmente quisiera destruir y aniquilar.

Que con fecha 19 de enero de 2018 se lleva a efecto la audiencia de conciliación con la asistencia del apoderado de la parte demandante y en rebeldía de la demandada, por lo que aquella no se produce.

Que con fecha 8 de junio de 2018 se recibe la causa a prueba, resolución modificada el día 24 de julio de 2018.

Que con fecha 15 de octubre de 2020 se cita a las partes a oír Sentencia.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA TACHA DEL TESTIGO:

PRIMERO: Que la parte demandada tacha al testigo Héctor Yáñez Guajardo en virtud de la causal establecida en el numeral quinto del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil.

Funda la causal de inhabilidad opuesta en que de las propias declaraciones del deponente, quien ha señalado en su declaración trabaja para el demandante.

SEGUNDO: Que la parte demandante solicita el rechazo de la tacha opuesta argumentando que el testigo es un contador independiente que le presta servicios al demandante, sin que exista relación de subordinación o dependencia.

Agrega que las normas que contemplan las tachas son de derecho estricto por lo que



Foja: 1

no es posible asimilar la situación de un contador independiente con la de un trabajador, por lo que no se configura la causal de tacha invocada por el demandado.

TERCERO: Que teniendo presente que el testigo ha declarado que el demandante Pérez Walker es su cliente y que presta servicios en su favor por los que es remunerado, resulta claro a juicio del Tribunal que el deponente no se encuentra inhabilitado para declarar en este juicio, toda vez que no es posible estimar que por las labores que realiza tiene la calidad de trabajador dependiente del actor, sino que por el contrario dichas labores las desempeña en el ejercicio de una profesional liberal, razones que resultan suficientes para proceder al rechazo de la tacha opuesta.

EN CUANTO AL FONDO:

CUARTO: Que son hechos de la causa por no encontrarse controvertidos que entre la sociedad Asesorías e Inversiones Ipewa Ltda. representada por Ignacio Pérez Walker y Enel se celebró un contrato de prestación de servicios de apoyo y seguimiento al desarrollo de proyectos, por el cual el actor se obligó a prestar asesoría profesional con el objeto de dar apoyo al desarrollo y perfeccionamiento del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Punta Alcalde, dando a conocer de la mejor manera posible el proyecto a las autoridades administrativas municipales, provinciales, regionales, centrales, estableciendo que el contrato tendría vigencia a partir del primero de enero hasta el 30 de junio de 2013, extendiendo su duración hasta el 31 de diciembre de ese año por Addendum de fecha 20 de junio de 2013. Asimismo queda acreditado que se estableció como honorarios el pago de 219 UF mensuales, que se pagarían contra la entrega de un informe mensual de la situación regional, hasta el día 30 de junio de ese año, fecha en que se debería entregar un informe final, salvo que el contrato se prorrogare.

Que de igual modo resulta probado a partir de los escritos de discusión de las partes, que la demandada luego de efectuar una auditoría interna concluyo que la demandante no había cumplido con sus obligaciones contractuales- a saber- la entrega de informes mensuales y de un informe final, por lo que encargo un informe en derecho al estudio Cariola Diez Pérez-Cotapos, el que recomendó rectificar su declaración de impuestos de los años 2012 a 2015 identificándolo como gasto no necesario para producir la renta, cuestión que la demandada realizó ante el Servicio de Impuestos Internos en el mes de junio de 2015.

Que por otra parte es posible establecer, según lo reconoce la demandada en su escrito de contestación, que recibió correos electrónicos del actor en los que se reseñaba las reuniones que aquel había mantenido con distintas personas ligadas al proyecto en cuestión.

QUINTO: Que en orden a acreditar la efectividad de las circunstancias invocadas en la demanda como determinantes de la responsabilidad extracontractual que se pretende hacer efectiva respecto de la demandada, la parte demandante acompañó prueba documental consistente en impresiones de correos electrónicos enviados por el



Foja: 1

demandante Perez Walker a la demandada de fecha 21 de febrero con su documento adjunto, 13 de marzo, 11 de abril, 5 de junio, 27 de junio, 30 de julio y 15 de octubre todos del año 2013, correos electrónicos singularizados en presentación de folio 41, debidamente percibidos en la audiencia llevada a efecto el día 15 de junio de 2019, copia de contrato de prestación de servicios de apoyo y seguimiento del desarrollo de proyectos celebrados entre Enel e Ipewa con vigencia desde el primero de enero de 2013 hasta el 30 de junio de 2013, copia de adendum de 20 de junio de 2013, copia de libro diario y Libro mayor de Enel de los meses abril, mayo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre de 2013 y enero de 2014, Informe Policial N°17/00410 de fecha 16 de enero de 2017 de la Policía de Investigaciones de Chile y sus anexos, copias de libro diario y libro mayor de Enel correspondiente a los meses de abril, mayo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre de 2013 y enero de 2014, Informe Policial N°17/00410 de fecha 16 de enero de 2017 de la Policía de Investigaciones de Chile y sus anexos, Informe Policial N°297 de 26 de octubre de la Policía de Investigaciones de Chile y sus anexos, formulario N°2217 de 23 de junio 2015, formulario N°21 de 30 de junio de 2015, oficio ordinario N°2580 de fecha 14 de septiembre 2016 del departamento de Defensa Judicial Penal del Servicio de Impuestos Internos, Ordinario N°609 de 8 de septiembre de 2016 de la dirección de grandes contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos, Informe N°125 de 2 de octubre de 2015 de la jefa de área de casos especiales del SII, Informe N°66 de 30 de junio de 2015, Formulario N°22 ingresado por Enel folio 50711942, Circular N°49/2012 de tres de diciembre de 2012 de la Unidad de Análisis Financiero, Informe Policial N°276/00410 de 30 de noviembre de 2016 de la Policía de Investigaciones de Chile, Instrucción particular N°092017/FAC/22001 de fecha 8 de septiembre de 2017 de la fiscal Ximena Chong, correo electrónico de 5 de octubre de 2017 enviado por el abogado Martin Besio a la fiscal Chong, Informe Policial N°242700410 de fecha 8 de octubre de 2016 de la Policía de Investigaciones de Chile, Instrucción particular N°092016/FAC/18039 de la fiscal Chong, Informe Policial N°254/00410 de fecha 8 de noviembre de 2016 de la Policía de Investigaciones y sus anexos 6, 7 y 8, Resolución FR N°286/2016 de 8 de julio de 2016 del Fiscal Regional Metropolitano de la Zona Centro Norte, informe anual de boletas de honorarios electrónicas de Ignacio Pérez Walker de los años 2016 y 2017, tres tomos de la Carpeta Investigativa causa RUC 1600646320-0, los que apreciados legalmente permiten establecer, en lo que interesa al punto de prueba en análisis, que Ignacio Pérez Walker actuando como representante de la sociedad Ipewa Ltda. envió a la demandada-en las fechas que en ellos se indica-, una serie de correos electrónicos en los que da cuenta de las actividades realizadas, consistentes principalmente, en las reuniones sostenidas con los distintos actores sociales, judiciales y políticos relacionados con el proyecto Punta Alcalde.

Que asimismo queda establecido que la demandada emitió y aprobó estados de pago en favor de Ipewa Ltda. correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio,



Foja: 1

agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2013.

Que finalmente queda probada la existencia de una auditoria interna realizada por Audit Chile que se denominó “Análisis 2012-2015” la que se realizó por encargo del Comité de Directores y Directorio de Endesa sobrepagos efectuados por Endesa y sus filiales en Chile para actividades de asesoramiento y servicios profesionales de “Personas expuestas políticamente” o involucradas en escándalos de presunto financiamiento ilegal de partidos políticos, entre las que se incluyó al demandante Ignacio Perez Walker, en atención a que su hermano era miembro del directorio de la empresa del Estado Zofri, estableciéndose que de los documentos disponibles aparecía que no era coherente con los que se debían entregar de acuerdo al contrato celebrado, ya que solo se contaba con un correo electrónico enviado por el consultor en el mes de julio de 2013 y que en el informe en derecho elaborado por el estudio Cariola, se concluyó que la falta de antecedentes no implicaba necesariamente que los servicios no se hubieren prestado, por lo que se estaría frente a un problema interno de la compañía por falta de solicitud y/o registro de los respaldos correspondientes.

Que de igual modo se acompañó artículo de prensa titulado “Directorio de Enersis aprueba reestructuración de sus negocios”, publicado por el portal Emol el 27 de julio de 2015, nota de prensa titulada “Grupo Enersis Post Reestructuración: 5% de menor dotación, ahorros anuales por US \$400 millones y más dividendos”, publicada en la sección Economía y Negocios de El Mercurio de 13 de diciembre de 2015, artículo de prensa titulado “Enersis prepara plan de reestructuración y despediría a más de 300 empleados”, publicado por el portal Biobiochile.cl el 21 de marzo de 2016, nota de prensa titulada “Enersis concreta Emol el 21 de abril de 2016, currículum vitae del doctor Santiago Soto información publicada sobre sus antecedentes profesionales en la página web www.drsantiagosoto.cl”, informe denominado “Análisis preliminar de eventuales escenarios jurídicos” de fecha 22 de junio de 2015 suscrito por los abogados Florencio Bernaldes y Marcela Silva, artículo publicado en el diario El Mostrador de 30 de julio de 2015, nota publicada en portal web www.nuevamineria.com de 19 de octubre de 2016, artículo publicado en El Mercurio de 31 de diciembre de 2017, nota publicada en portal web de revista electricidad de 10 de junio de 2015, artículo publicado en El Pulso de fecha 11 de junio de 2015, nota publicada en La Tercera de fecha 16 de septiembre de 2016, artículo publicado en el portal web de la Radio Universidad de Chile el 20 de septiembre de 2016, nota publicada en El Mercurio de 21 de junio de 2015, artículo publicado por La Izquierda Diario, nota publicada en www.newprocess.cl, artículo publicado en La Tercera, reportaje de Ciper Chile de fecha 17 de junio de 2015, cartolas bancarias correspondientes a la cuenta corriente 490042207 que mantiene IPEWA en el Banco Edwards-Chile, documentos emanados de terceros ajenos al juicio que no les han prestado su reconocimiento en juicio, por lo que de conformidad con el numeral primero del artículo 346 del Código de Procedimiento



Foja: 1

Civil carecen de valor probatorio.

Que también acompañó copia de artículo publicado 20 de enero de 2014 suscrito por el demandante Ignacio Pérez Walker, facturas emanadas Ipewa Ltda., formulario 29 de Ipewa correspondiente al periodo comprendido entre los meses de febrero de 2013 y diciembre de 2014 y a los meses de febrero, abril y mayo de 2015, formulario 22 de Ignacio Pérez Walker correspondiente a los años tributarios 2014, 2015 y 2016, formulario 22 de Ipewa correspondiente a los años tributarios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, los que emanando de la parte que los presenta carecen de valor probatorio.

SEXTO: Que por su parte la demandada agregó a los autos copia del contrato de prestación de servicios y su respectivo anexo y solicitud de rectificación de impuestos de renta presentada por Enel al Servicio de Impuestos Internos de 23 de julio de 2015, los que ya fueron ponderados probatoriamente en los motivos que preceden.

Que también acompañó declaración de prensa de fecha 22 de junio de 2015, la que por emanar de la parte que la presenta no tiene mérito probatorio.

SÉPTIMO: Que obra asimismo exhibición de documental rolante en los folios 59 en los que se acompañaron acta de sesión de directorio de Enel, acta de comité de directores de Enel de fecha 9 de junio de 2015, contratos de asesorías celebrados por Enel o alguna empresa relacionada entre 2012 y 2015 en relación a los proyectos Bocamina, Los Cóndores, Punta Alcalde, Hidroaysén y Neltume, contratos de asesorías celebrados entre Enel o empresas relacionadas con Marcelo Tokman y Raúl Ancán entre 2012 y 2015, contratos celebrados entre Enel o alguna empresa relacionada con las empresas G2P Consultores y Martelli Asociados Ltda. entre el año 2012 y 2015 y las facturas e informes emitidos, Informe elaborado para Enel por Audit Chile titulado “Análisis del proceso de asignación de contratos y pagos de honorarios a personas expuestas políticamente” para el periodo 2012-2015, copia timbrada de los Formularios número 2117 del SII de fecha 23 de junio de 2015 y 26 de junio de 2015, los que reiteran las conclusiones probatorias que se han establecido probatoriamente.

OCTAVO: Que el artículo 2314 del Código Civil dispone que el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito.

NOVENO: Que en autos se ha deducido acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual de la demandada por la acción dolosa o culpable que la demandante le imputa y que ha hecho consistir en la rectificación de la declaración de impuesto a la renta de los años 2012 a 2015 que presentó ante el SII y que fundó en la circunstancia de no existir antecedentes que justificaran los pagos realizados a la demandante, ya que no habría cumplido con las obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios, lo que era falso, ya que pese a que había procedido al envío de informes mensuales por correos electrónicos que se encontraban en poder de Endesa, esta lo incluyó entre operadores políticos relacionados con el financiamiento ilegal de la



Foja: 1

política, derivando tal situación en una investigación penal en su contra y de diversos artículos de prensa en los que se le incluyó como parte de dicha practica ilegal.

DECIMO: Que del mérito de los antecedentes probatorios que obran en autos y que han sido analizados y ponderados en los motivos que preceden se ha establecido que si bien es cierto Enel afirmó solo contar con un correo electrónico de parte del demandante Pérez Walker entre los antecedentes que entregó para realizar la auditoria interna ordenada por su directorio y que ha quedado establecido que el actor envió con fecha 21 de febrero con su documento adjunto, 13 de marzo, 11 de abril, 5 de junio, 27 de junio, 30 de julio y 15 de octubre todos del año 2013 diversos correos recepcionados por el demandado, no es menos cierto que dichos documentos electrónicos no permitían por si solos dar por cumplida la obligación establecida en el contrato celebrado entre las partes, ya que como lo ha afirmado la demanda solo mencionaban reuniones de carácter social y otras oficiales con distintos actores relacionados con el proyecto Punta Alcalde, tanto así es que Enel lo entendió así al informar al ente auditor, identificándolo como un “correo electrónico” no un informe y advirtiendo tal situación decidió efectuar la rectificación de su declaración de impuestos. Por lo que la circunstancia de haber dado cuenta solo de la existencia de un mail, pese a haber recepcionado otros, como se ha establecido en lo precedente, no puede ser calificado como una conducta dolosa- ya no existe antecedente probatorio alguno que permita concluir la existencia de una intención positiva de inferir daño a los actores- como asimismo de una grave falta de cuidado, ya que como se indicó, la demandada solo los considero como un mero documento mediante el cual se ponía en su conocimiento algunas de las actividades que realizaba el demandante Pérez Walker en el ámbito de las tareas para las que se le había contratado, pero en ningún caso los informes que se había obligado a evacuar.

Que a mayor abundamiento la conducta desplegada por Enel no constituye sino el cumplimiento de un deber legal, el que no puede sino ser calificado de un legítimo actuar de su parte.

Que en nada altera la conclusión precedente el informe en derecho elaborado por el estudio Cariola, Diez y Pérez Cotapos, ya que solo sugirió la posibilidad que el trabajo había sido cumplido, como asimismo las declaraciones de miembros de Endesa en las que afirman que el actor Pérez Walker habría dado cumplimiento al trabajo encomendado, ya que fueron prestadas extrajudicialmente.

UNDECIMO: Que finalmente resulta menester concluir que la circunstancia de haber sido incluido el actor con sujetos que él califica de operadores políticos en la rectificación ante el Servicio de Impuestos Internos, no constituye por sí sola una acción que pueda ser calificada como dolosa o culpable, ni existen antecedentes probatorios que así lo establezcan.

Que en el mismo sentido el hecho de haber sido asimilado el actor Pérez Walker a la condición de operador político por los medios de prensa nacionales, no constituye a juicio de esta Sentenciadora una acción imputable a la demandada.



Foja: 1

DUODECIMO: Que correspondiendo al demandante de conformidad con lo establecido por el artículo 1698 del Código Civil probar la existencia de la acción dolosa o culpable que atribuyo a la parte de la demandada aquel no lo hizo, por lo que constituyendo tal circunstancia el primer requisito de existencia de la responsabilidad extracontractual, solo cabe el rechazo de la acción indemnizatoria, tal como se dirá en lo resolutivo de esta Sentencia.

DECIMO TERCERO: Que la restante prueba en nada altera lo decidido.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 173, 254, 342 N°2 y 3, 346 N°1 Y 358 N°5 del Código de Procedimiento Civil y artículos 44, 1698 y 2314 del Código Civil, se declara:

I-. Que se rechaza la tacha deducida por la parte demandada en contra del testigo Héctor Yáñez Guajardo;

II-. Que se rechaza en todas sus partes la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual deducida en autos;

II-. Que cada parte pague sus costas.

Notifíquese.

ROL C-13948-17.

DICTADO POR ROMMY MÜLLER UGARTE, JUEZ TITULAR DEL SEXTO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.

AUTORIZADA POR DOÑA MINDY VILLAR SIMÓN, SECRETARIA TITULAR.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiséis de Noviembre de dos mil veinte**

